



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: LUIS JAVIER MADRID TOBÓN
Demandados: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 15
Radicado n.º: 05001-31-05-002-2020-00456-01 (O2-22-445)

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dentro del proceso ordinario instaurado por **LUIS JAVIER MADRID TOBÓN** en contra de **COLPENSIONES**, con radicado n.º 05001-31-05-002-2020-00456-01 (O2-22-445).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante gestor judicial, **LUIS JAVIER MADRID TOBÓN** pretende que se condene a la demanda a reconocerle y pagarle el retroactivo de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, así como el pago de los intereses moratorios, de la indexación, y de las costas procesales, tras fundamentar sus pretensiones en que nació el 18 de octubre de 1963, laborando del 12 de enero de 1983 al 2 de enero de 2015 en la empresa Cristalería Peldar, desempeñando su labor expuesto a altas temperaturas, lo que le permitió causar el derecho a la pensión de vejez al cumplimiento de los 50 años de edad, el 18 de octubre de 2013, por lo que solicitó el reconocimiento y pago de la misma a la entidad accionada el 15 de

julio de 2014, la que fue negada por Resolución GNR 393243 del 11 de noviembre de 2014, debiendo demandar judicialmente el reconocimiento de la misma el 1º de diciembre de 2014, proceso que cursó bajo el radicado único nacional n.º 05001310500120140165400, suspendiendo así el término prescriptivo hasta tanto finalizara el trámite jurisdiccional; que al momento de cesar su labor en Peldar, se retiró del sistema general de pensiones y no volvió a aportar; que a pesar de estar en curso la demanda, siguió pidiendo la pensión a COLPENSIONES, entidad que continuó denegándola por haber perdido competencia para decidir al respecto ante la demanda judicial instaurada; que el proceso judicial finalizó con sentencias absolutorias en primera y segunda instancia, pero luego solicitó nuevamente la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, la cual fue concedida mediante Resolución SUB 127047 del 22 de mayo de 2019, bajo los parámetros del Decreto 2090 de 2003, siéndole pagada la mesada pensional a partir del 6 de junio de 2015, y declarando prescritas las mesadas causadas antes de tal data; y que el 20 de noviembre de 2019 solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, el que fue denegado por Resolución SUB 61841 del 3 de marzo de 2020.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 11 de febrero de 2021 (doc. 03), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

Una vez notificada (doc. 04), COLPENSIONES contestó la demanda el 8 de marzo de 2021 (doc. 06) a través de apoderada judicial, oportunidad en la cual se opuso a las pretensiones formuladas, por carecer de fundamentación fáctica, legal y probatoria. En ese norte, planteó las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el retroactivo pensional solicitado, inexistencia de obligación de pagar intereses de mora, improcedencia de la indexación, imposibilidad de condena en costas o la atenuación de las mismas, prescripción, buena fe, y compensación.

1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 5 de agosto de 2022 (docs. 19 a 21), con la que el cognoscente de instancia absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra, por estimar configurado el efecto impeditivo de la cosa juzgada, a la vez de gravar en costas al demandante y a favor de la entidad pública.

1.3. APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por el apoderado judicial del demandante, aseverando en ese propósito que COLPENSIONES no cumplió con sus obligaciones de asesorar y efectuar un estudio detallado del demandante, sino que se limitó a denegar la pensión por existir una demanda judicial en trámite, el que fue iniciado por el demandante precisamente por el error de la entidad de la seguridad social de negarle en sede administrativa su derecho pensional, de suerte que, se estaría beneficiando de su propio error con la decisión absolutoria de primera instancia.

1.4. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad legal para alegar de conclusión en segunda instancia, el apoderado judicial de la parte actora adujo que a pesar de que, ante la respuesta negativa de Colpensiones del 11 de noviembre de 2014 acudió a la jurisdicción ordinaria, su poderdante continuó solicitando la pensión en reiteradas ocasiones, puesto que desde el 2 de enero de 2015 cesó en sus labores, pero la entidad siempre le contestó negativamente alegando “FALTA DE COMPETENCIA”, sustento que, además de reflejar y demostrar un actuar negligente, es equivocado, pues por el hecho de existir un proceso judicial en curso, no se diezma, ni se sustituye la facultad y responsabilidad de la administradora con su afiliado, cual es la de estudiar su caso concreto y decidir sobre el mismo.

Por su parte, la apoderada judicial de COLPENSIONES, indicó que no existen motivos de hecho o de derecho que permita generar retroactivo alguno o incrementar la mesada pensional, por lo que debe confirmarse la sentencia del *a quo*, toda vez que estamos frente a la figura de la cosa juzgada.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el examen del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en la presente Litis se centra en definir: ¿Sí le asiste derecho al demandante a que se le reconozca y pague el retroactivo pensional instado? En caso afirmativo ¿Sí proceden los intereses moratorios y la indexación de las condenas?

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en cuanto que se reúnen los presupuestos legales y jurisprudenciales configuradores de cosa juzgada de cara a la litis planteada, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Cosa juzgada

No es objeto de controversia que a la parte actora le fue reconocida la pensión de vejez a través de la Resolución SUB 127047 del 22 de mayo de 2019 a partir del 6 de junio de 2015; como refulge palmar de la citada resolución (doc. 02 pág. 137).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que, con antelación al presente trámite, el señor LUIS JAVIER MADRID TOBÓN instauró demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES E.I.C.E., conocida con el radicado único nacional 05001-31-05-001-2014-01654-00, con la que pretendió se reconociera su derecho a la pensión especial de vejez por alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003, desde el 18 de octubre de 2013; el pago del retroactivo pensional, incluidas las mesadas adicionales; los intereses moratorios, la indexación y costas procesales, demanda que finalizó con sentencias absolutorias del 17 de agosto de 2016 (carp. 07, subcarpeta “ExpedienteAdministrativo”, doc. 12) y del 7 de diciembre de 2017 (ibíd. doc. 13), tal y como lo concluyó el *a quo*, sin que en la alzada se hubiere confutado tal conclusión (doc. 21 mín. 1:00 y carp. 07, subcarpeta “ExpedienteAdministrativo”, doc. 88).

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Esta figura jurídica tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico (CSJ SL5121-2018, SL1364-2019, SL3649-2021, AL1359-2022). Tiene por finalidad otorgar a las decisiones plasmadas en una sentencia, como en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes, y definitivas, efectos que se reconocen por disposición expresa del

ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias, y alcanzar un estado de seguridad jurídica (C-774 de 2001 y C-100 de 2019).

De ahí que, emerge como diáfana conclusión, la material y efectiva imposibilidad de las partes y de la comunidad en general, de instaurar nuevamente ante los estrados judiciales el mismo litigio para así salvaguardar y garantizar el principio de la seguridad jurídica que caracteriza la función judicial, imponiéndole la Ley al juzgador el deber, al momento que tenga conocimiento de la ocurrencia de esta figura y verificado los requisitos exigidos para tales efectos, de declarar su configuración sin dilación y aun de forma oficiosa.

En esta dirección, según lo dispuesto en el artículo 303 del CGP, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes, siendo que para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

- a) Identidad de partes, lo que implica que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión de la que se predica la cosa juzgada, criterio que no debe confundirse con la “identidad de personas”, pues si bien es cierto que el requisito se configura cuando los integrantes de las partes en el nuevo proceso son las mismas personas que intervinieron en el anterior, puede suceder que haya cambio físico de personas, mas no alteración de las partes, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores mortis causa.
- b) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial respecto de la cual se predica la cosa juzgada; se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado; igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos derivados de un derecho que no fueron declarados expresamente.
- c) Identidad de causa petendi, se presenta cuando entre la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada existen los mismos fundamentos de hecho como sustento, referidos al supuesto fáctico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado.

Para la Sala, la configuración de la figura de cosa juzgada no exige que las actuaciones cotejadas correspondan a un reflejo exacto o idéntico, pues lo que está llamado a verificarse, es que en efecto se plantee el mismo litigio que fuera desatado por la jurisdicción. Así, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia SL818 de 2021 determinó que:

“(…) conviene aclarar que para que en un caso determinado se configuren los elementos axiológicos del instituto procesal de la “cosa juzgada” no es indispensable que todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. La ley procesal no exige para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea un calco o copia fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo fundamental es que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente fenecido.

Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una sentencia judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos fácticos de la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el objeto de enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en una tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado frustrado. Tal actitud fomentaría el desgaste del sistema judicial y socavaría su seriedad, respetabilidad y prestigio. De ahí porqué resulta muy importante que quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado de señalar de manera concreta, sintética, completa y leal todos los argumentos de facto que le asisten a su favor, con la conciencia de que el proceso que ventila es en principio único y definitivo, y solo tiene las etapas que la ley garantiza dentro del debido proceso por ella gobernado (...).”

En ese sentido, la Sala advierte que entre el *sub lite*, conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-002-2020-00456-00, y la anterior litis, conocida con el radicado único nacional 05001-31-05-001-2014-01654-00, se verifica el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos, en particular, la identidad de objeto y de causa petendi.

Así, sea lo primero indicar que como bien lo concluyó el *a quo*, no suscita mayor controversia la comprobada identidad de las partes integrantes de la litis en una y otra actuación procesal, que dicho sea de paso, corresponde al señor LUIS JAVIER MADRID TOBÓN como extremo demandante y a COLPENSIONES E.I.C.E. como convocada al juicio, en su calidad de administradora del régimen de prima media con prestación definida.

Ahora, frente a los elementos restantes la conclusión es la misma y así refulge de la lectura de los hechos y peticiones en una y otra acción judicial. Es así que en la demanda primigenia, la parte demandante solicitó de manera directa el reconocimiento de la pensión de vejez especial por alto riesgo retroactivamente desde el 28 de octubre de 2013, con

fundamento en que cumplió 51 años de edad el 18 de octubre del 2014, que laboró al servicio de Peldar S.A. en altas temperaturas desde el año de 1983 y durante 31 años. Añadió, que el 16 de julio del 2014 reclamó la prestación económica pretensa a la accionada, la cual fue negada, y que contaba con más de 1800 semanas cotizadas (carp. 07, subcarpeta “ExpedienteAdministrativo”, doc. 88 pág. 1).

Aclarado lo anterior, y aun a pesar de los esfuerzos argumentativos de la parte demandante, para la Sala, de lo que viene dicho se infiere que en una y otra actuación aflora la misma cuestión litigiosa, cual es, el reconocimiento y pago de las mesadas causadas retroactivamente, pues si bien en la demanda prístina se pretendieron las mesadas desde el 18 de octubre de 2013 y en el *sub lite* se pretenden desde el 2 de enero de 2015 y hasta el 6 de junio de 2016 (doc. 02 pág. 1), ciertamente para el momento en que se resolvió la pretensión inicial mediante sentencias absolutorias del 17 de agosto de 2016 (ibíd. doc. 12) y del 7 de diciembre de 2017 (ibíd. doc. 13), los juzgadores debieron analizar necesariamente si se habían causado mesadas pensionales a favor del demandante en el interregno que va del 2 de enero de 2015 al 6 de junio de 2016, toda vez que en caso de resultar avante la pretensión la condena debía extenderse hasta la fecha en que se profiera la sentencia, de conformidad con el artículo 283 del CGP, de suyo que entrar a resolver las pretensiones del *sub studium* implicaría indefectiblemente reexaminar si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la mesadas pensionales dentro de un interregno de tiempo que traslapa el periodo del 2 de enero de 2015 al 6 de junio de 2016; lo que terminaría por reabrir una discusión que ya fue decidida con efectos de cosa juzgada, con independencia de sí las decisiones de primera y segunda instancia fueron acogidas o no por las partes procesales.

Como corolario de lo expuesto, por encontrarse acreditados la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 303 del CGP para la configuración de la institución jurídico procesal de la cosa juzgada respecto de los hechos y pretensiones entre la presente actuación y la surtida bajo el radicado único nacional 05001-31-05-001-2014-01654-00, no asoma alternativa distinta para la Sala que confirmar la decisión de primer grado opugnado.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de COLPENSIONES, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto por el primero, y según dispone el numeral 1º del artículo 365 del CGP, fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 1.160.000, equivalente a un (1) SMLMV. Las de primera instancia se confirman, toda vez que la parte actora fue vencida en el juicio.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación proferida el 5 de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

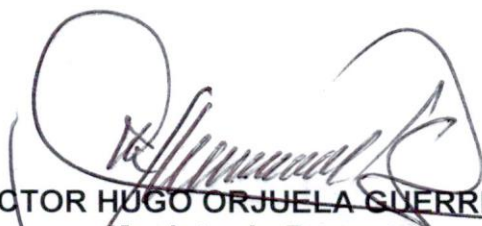
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de LUIS JAVIER MADRID TOBÓN y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$ 1.160.000**. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2020 del 23 de junio de 2020, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


Cópiese, comuníquese y cúmplase.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



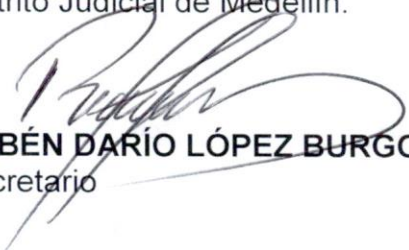
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario